

# Cero en conducta: resistencia magisterial y privatización de la educación pública

Luis Hernández Navarro\*

La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) atenta contra los principios educativos establecidos en la Constitución. La educación pública no es una empresa y el mercado no es una escuela de virtud. La actividad docente no debe regirse conforme a criterios mercantiles. La enseñanza debe seguir siendo un bien público, no una mercancía que beneficie a unos cuantos privilegiados. Es por eso, y no por el mantenimiento de privilegios, que luchan los miles de maestros que se oponen a la Alianza en el país.

**E**l descontento magisterial crece día con día. La situación es novedosa. Los maestros no se movilizan ahora por cuestiones salariales, sino por la defensa de su empleo y de la educación pública. Participan no sólo profesores democráticos, sino también dirigentes oficialistas indignados con Elba Esther Gordillo.

Dos hechos han derramado el vaso. Uno es la firma y puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). El otro es la pretensión de acabar con el normalismo. Los profesores han sido colocados en una situación límite y han respondido a ella.

Formalmente la ACE ha sido presentada como una reforma que promueve un sistema de recluta-

miento riguroso y competitivo, que incorpora mecanismos nuevos para el otorgamiento de plazas de maestros de educación básica, y para su capacitación, evaluación y promoción, vinculándolos al desempeño docente. Teóricamente, el ingreso, permanencia y promoción de los mentores se efectuará mediante un nuevo modelo que garantiza la legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, calidad y equidad de los procesos.

La realidad es, sin embargo, diferente. Los maestros de base intuyen –y han documentado– que el discurso en favor de la calidad de la educación y la niñez es maquillaje retórico y que, de imponerse, su sobrevivencia como profesionales, su estabilidad laboral y la educación pública están en riesgo.

El nuevo modelo educativo quiere que el profesor deje de serlo para

transformarse en un *facilitador* sin control sobre el proceso educativo, encargado de prender la televisión o el pizarrón electrónico en el aula.

La ACE fue acordada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo al margen de cualquier consulta con el magisterio de base. El Banco Mundial –promotor de la reforma– aplaudió su implementación. El anuncio de que Transparencia Mexicana fungiría como su auditor externo aumentó la desconfianza. No hay imparcialidad alguna en ese organismo, sino conflicto de intereses. El presidente de su consejo rector, Federico Reyes Heróles, ha sido durante años asesor, operador y defensor político de *la maestra*.

La Alianza amenaza los mecanismos de evaluación de los maestros que ya se encuentran en servicio. De la noche a la mañana su experiencia

\* Investigador independiente y periodista de *La Jornada*.

de años de trabajo y estudio es prácticamente tirada a la basura como criterio de evaluación. En su lugar, serán calificados a través de exámenes efectuados por personal que sabe muy poco sobre educación.

Uno de los elementos centrales para evaluar a los docentes en servicio será el de las tasas de rendimiento y aprovechamiento de sus alumnos. La medida olvida un hecho básico: la realidad socioeconómica condiciona profundamente el aprendizaje. Los estudiantes de una escuela de la Montaña de Guerrero que migran con su padres para trabajar de jornaleros en la pizca del tomate en Sinaloa tendrán peores calificaciones que los que estudian en una escuela urbana, más aún si el examen que se aplica en ambos casos es el mismo. Así las cosas, los profesores de centros escolares de alta marginación, que educan en la pobreza, que atienden alumnos provenientes de familias desintegradas y que deben dar clases a grupos numerosos, están condenados a obtener evaluaciones muy deficientes, a pesar de que su labor sea de calidad.

Una de las medidas torales de la ACE, el famoso examen de oposición para definir qué maestros ocuparán las plazas vacantes, anunciado como una muestra de imparcialidad en el reclutamiento de personal, resultó un fiasco. En muchos estados las pruebas no fueron foliadas y se permitió que quienes las presentaron salieran de las aulas e, incluso, que las fotocopian para luego regresar a contestarlas. Concuraron todos aquellos que consiguieron una ficha para hacerlo, sin importar si eran maestros o no, o si eran egresados de las normales. Se dejó de lado la experiencia de los miles de maestros en servicio con plazas interinas y muchos años de servicio.

La ACE afecta un derecho ganado por el magisterio en muchos estados: el de heredar su plaza a sus hijos, que cuentan con la capacitación profesional como profesores, cuando se jubilan o mueren. En Morelos, por ejemplo, hay 3 mil 500 profesores a punto de jubilarse que, de la noche a la mañana, perderán esta conquista, de la misma manera en la que, debido a la reciente Ley del ISSSTE, se han quedado sin la posibilidad de recibir una pensión digna. Ellos representan 15% de los mentores de la entidad.

De la misma manera, la ACE abroga el derecho de los egresados de distintas instituciones educativas a obtener una plaza al terminar sus estudios en las normales públicas, ganado por la vía de la costumbre.

El mecate se ha achicado demasiado en el sistema de educación nacional. Muchos maestros sienten que se les está despojando de su futuro, y que la educación pública en la que se formaron se privatiza. Ya no tienen para dónde

hacerse. No les han dejado más remedio que luchar por su supervivencia como profesores.

## CNTE: 29 años

A lo largo de los últimos dos años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha desempeñado un papel central en la resistencia contra la Ley del ISSSTE y en el rechazo a la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). Sus integrantes fueron la columna vertebral en la oleada de amparos contra la reforma y para boicotear la afiliación al sistema de pensiones privado. Desde comienzos del año escolar iniciado en septiembre de 2008 estuvieron en primera línea en la defensa de la educación pública y el normalismo.

Hace 29 años nació la Coordinadora. El encuentro fundacional se efectuó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17 y 18 de diciembre de 1979. Desde entonces, año con año, el movimiento magisterial democrático, ha protagonizado importantes luchas en el ámbito laboral y político.

La CNTE se formó promovida por vigorosos movimientos regionales de maestros en estados como Chiapas y Tabasco, así como en la Montaña de Guerrero y La Laguna. Demandó un aumento salarial del 30%, re zonificación por vida cara y democracia sindical. No fue producto de la iniciativa de algún partido o grupo político. De hecho, las corrientes sindicales que actuaban en el interior del sindicato, incluyendo algunas con muchos años de actividad, quedaron relegadas ante el vertiginoso empuje de los profesores de base. Su nacimiento permitió que esas luchas locales rompieran su aislamiento, extendieran la protesta a otros estados y se proyectaran a nivel nacional.

La Coordinadora se definió a sí misma como una fuerza democrática e independiente, que luchaba dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), claramente diferenciada de Vanguardia Revolucionaria y los partidos políticos. Era una fuerza formada por los maestros de base organizados en consejos centrales de lucha (CCL), grupos promotores y corrientes sindicales.

Dominaba la dirección gremial, desde 1972, Vanguardia Revolucionaria. Su dirigente, Carlos Jonguitud Barrios, controlaba el sindicato con mano de hierro, con grupos de golpadores y un sistema de canonjías para sus incondicionales, entre las que se encontraban las dobles plazas, las licencias sindicales con goce de sueldo, los créditos y los programas de vivienda. El SNTE formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Gobernaba el país José López Portillo. La propaganda oficial anunciaba que México nadaba en petróleo y se debía preparar para “administrar la abundancia.” Pero los salarios de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la inflación en los estados donde se explotaba el oro negro los hacía aún más precarios. “País petrolero, maestro sin dinero”, coreaban los mentores en sus protestas.

Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los maestros pertenecientes a grupos más radicales temían que esa legalización implicara que, a partir de ese momento, la lucha social debía regirse por criterios parlamentarios, dándole al partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución de la lucha reivindicativa.

En 1979, la insurgencia obrera de los años setenta había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias sindicales democráticas que actuaban en el interior de los grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento por remover a los líderes venales. Así había pasado con los electricistas y los metalúrgicos. El entorno gremial en el que la CNTE desplegaba su lucha era desfavorable.

Han pasado 29 años desde entonces. Han gobernado al país seis presidentes de la República, de dos partidos diferentes. Una y otra vez, mandatarios y funcionarios en turno, aliados con los charros sindicales, han tratado de acabar con la Coordinadora. Decenas de sus dirigentes han sido asesinados, encarcelados o despedidos. Pero no han podido lograrlo: el movimiento sigue. Con altas y bajas, transformándose y reinventándose en el camino, la CNTE ha sobrevivido y se conserva como una poderosa organización sindical.

En muchos lugares las organizaciones que la integran son una formidable escuela de democracia y ciudadanía. Son una isla en el mar de corrupción del sindicalismo nacional y una fureza anticorporativa. Reivindican la dignidad del magisterio. Cuando han ganado las secciones sindicales del sindicato su gestión ha sido, en lo esencial, honesta. En algunos estados se han convertido en un modelo pedagógico alternativo.

En el camino, una parte de sus dirigentes han formado, dirigido o asesorado organizaciones urbano-populares y campesinas. Los maestros democráticos siguen comportándose, en las zonas rurales, como intelectuales orgánicos del campesinado. Otros se han incorporado a los principales partidos de izquierda. Unos cuantos han sido diputados y funcionarios públicos. Su compromiso, constancia y paciencia con la causa democrática y popular son asombrosos. La lucha de muchos sectores subalternos en el país sería

incomprensible si no se contempla en su análisis el papel que han desempeñado en ella los trabajadores de la educación democráticos.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de ellos han sido cooptados, sobre todo a partir de 1989, por Elba Esther Gordillo. Otros han traicionado a sus compañeros y se han convertido en todo aquello contra lo que siempre lucharon. Algunos más hasta, como sucedió con Solidaridad Campesino-Magisterial de Chiapas, se volvieron paramilitares.

A 29 años de formada, la Coordinadora ha tenido un nuevo aire. La lucha contra la ACE la ha fortalecido como no sucedía en años. Ha superado la prueba del tiempo. Cuenta con una dirección estable y con objetivos de lucha claros.

## La Banda de la Y

Hasta enero de 2009, tomaban las grandes decisiones del gremio magisterial, no obstante que son personal de confianza de organismos públicos. A pesar de no ser maestros, dirigían, junto con Elba Esther Gordillo y sus dos hijas, Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, el sindicato de maestros. Integraban la Banda de la Y, conocida así por las iniciales de sus apellidos o sobrenombres. Son Yunes, Yáñez y el Yerno.

Miguel Ángel Yunes es director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y aspira a ser gobernador de Veracruz. Se formó en los sótanos de la política de inteligencia junto a Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando González, el yerno, es subsecretario de Educación Pública y marido de Maricruz Montelongo. Francisco Yáñez fue hasta enero el director de la Lotería Nacional y uno de los personajes de las más cercanas confianzas de *la maestra*, de la que ha sido cajero. Un escándalo lo obligó a renunciar, para refugiarse en Estados Unidos, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda.

El poder de la banda de la Y en el interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha generado enorme malestar en las filas de los dirigentes tradicionales, llamados los de “cepa”. Ellos se han visto desplazados de la conducción gremial y humillados por estos tres personajes, que nunca han enseñado en aula. Otros líderes institucionales rompieron abiertamente con Elba Esther y formaron el grupo Tercera Opción.

A pesar del apoyo con el que Felipe Calderón la cubre, el control sindical que la maestra ejerce se erosiona aceleradamente. Muchos de los congresos realizados en los

estados para renovar las direcciones locales fracasaron en medio de grandes escándalos. Los líderes uncidos por Elba Esther no pudieron tomar posesión.

Entre los maestros de educación primaria de la ciudad de México y Chiapas impuso representantes espurios sin siquiera cuidar las formas estatutarias. Y, por si fuera poco, no pudo realizar el congreso nacional ni el pleno de dirigentes para reestructurar el comité ejecutivo nacional del SNTE. En estados como Tabasco se han formado sindicatos independientes.

Pero, más allá del pleito en las cúpulas, el verdadero problema de la Gordillo está con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El pasado 12 de julio los profesores disidentes nombraron un comité nacional alterno para disputar el poder que la maestra ostenta de manera ilegítima. Antes habían ya elegido comités seccionales democráticos en Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas, las dos Baja Californias, Chiapas y la sección 9, además de Oaxaca.

El comité nacional alterno inaugura una nueva etapa de lucha del magisterio disidente. Desde que, hace 29 años, se fundó la CNTE, sus integrantes han ensayado las más diversas tácticas de lucha para democratizar su sindicato, con resultados desiguales. Pero ahora que se les han cerrado casi todas las puertas de lucha institucional, han decidido ensayar una nueva vía.

El nombramiento de una dirección nacional alternativa retoma el camino andado por los profesores de primaria de la ciudad de México entre 1956 y 1960 con el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM). La nueva experiencia es similar a las Comisiones Obreras, la oposición gremial de base formada durante el franquismo en España para enfrentar al sindicato vertical, uno de los pilares de la dictadura.

La nueva etapa tiene sus antecedentes en una serie escalonada de reuniones entre diversas corrientes, que arrancan con el primer Encuentro Nacional de Dirigentes del Magisterio, efectuado en julio de 2007 en Tijuana, Baja California.

En esta asamblea se acordó la *Declaración Política de Tijuana*, en la que se convocó a formar una convergencia amplia en contra de Elba Esther Gordillo y a reivindicar la dignidad magisterial. El 25 de agosto, en la ciudad de México, se dio continuidad a la iniciativa, con el segundo encuentro. El primero de marzo de 2008 se realizó el tercer encuentro. El 13 y el 14 de mayo de ese mismo año la CNTE celebró su noveno congreso nacional y nombró una Junta Nacional del Gobierno Sindical. Hasta entonces la Coordinadora se

había dado a sí misma formas de coordinación más o menos flexibles y muy poco centralizadas.

Además del hartazgo con Elba Esther Gordillo y la Banda de la Y, la base material que alimenta el nuevo repunte disidente es la indignación ante la Ley del ISSSTE y la Alianza por la Calidad Educativa. En poco tiempo los trabajadores de la educación fueron despojados de sus pensiones y del control que ejercen sobre su materia de trabajo. De la resistencia han pasado a la desobediencia.

La columna vertebral de las protestas contra la modificación al sistema de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado han sido los maestros democráticos. Sin embargo, el descontento ante el asalto legislativo se extendió a muchos mentores que no necesariamente simpatizan con la CNTE. Las tres oleadas de amparos contra la nueva legislación han ampliado significativamente la coalición contra *la maestra*.

Los advenedizos que administran la educación pública en el país han decidido que los únicos culpables de lo que sucede en el espacio escolar son los maestros. Piensan que las grandes deficiencias pedagógicas que existen se resolverán sólo con más productividad, más vigilancia y un salario asociado a ambas variables. Quieren restablecer a como dé lugar una cadena de mando que ha escapado de sus manos. Al hacerlo, con el apoyo de Elba Esther, le han dado un escobazo al avispero.

El momento más oscuro en la noche es el que anuncia el nuevo amanecer. Los meses que siguen en el mundo magisterial serán agitados.

## Los amigos de la ACE

Robert Zoellick es el actual presidente del Banco Mundial (BM). Antes fue representante de Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC). *Zar* de la globalización, según la revista *Business Week*, es uno de los principales promotores del libre comercio. Ahora es, también, beligerante defensor de la ACE en México.

El procónsul del Consenso de Washington declaró al clausurar en la sede del BM los trabajos de la Conferencia Internacional sobre la Alianza por la Calidad de la Educación en México: “Lo que están haciendo aquí, a su manera, es muy revolucionario, no sólo para la educación, sino para México”. El directivo destacó el compromiso del gobierno de Felipe Calderón para lo que calificó como “una inversión en el futuro”, y se declaró “extremadamente impresionado” por el acuerdo.

Zoellick ofreció sin ambigüedad: “nosotros apoyamos fuertemente este esfuerzo y queremos ver de qué manera podemos respaldarlo”. Y se confesó “complacido de apoyar financieramente este esfuerzo”.

Que uno de los ayatolas del neoliberalismo y presidente en funciones del BM se involucre personalmente en la defensa de la Alianza sólo puede significar dos cosas: primero, que el Banco efectivamente está detrás de la reforma educativa mexicana; segundo, que su sesgo privatizador es incuestionable.

Los miles de maestros que se han movilizado en contra de la ACE en Morelos, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila y Baja California Sur (por citar unas cuantas entidades) saben esto. Es falso que protesten, como dice Calderón, para vender y negociar las plazas de maestros como si fueran suyas. Ellos no están defendiendo privilegios personales, sino la educación pública.

Lo primero que los mentores han denunciado es que los nuevos puestos de trabajo creados en el marco de la alianza no cubren las necesidades educativas de la población. Se requieren muchos más maestros en el país de los que las autoridades gubernamentales aceptan.

Es mentira que el concurso realizado para otorgar las plazas de nueva creación haya sido un éxito y un ejemplo de transparencia. Meses después de su aplicación y del inicio del curso escolar, no había información pública disponible del proceso de asignación de plazas. Los exámenes no tuvieron una calificación mínima aprobatoria. Concuraron, más allá de sus méritos profesionales, aquellos que obtuvieron la ficha para hacerlo. Su realización se efectuó en medio de todo tipo de anomalías.

Según señaló el ex subsecretario de Educación Pública, Lorenzo Gómez Morín, sólo entraron en la convocatoria “la Programación Detallada que emerge del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008; toda la vacancia de los estados, la que es parte de la plantilla ordinaria y que queda libre o puede quedar libre de manera temporal, hasta donde he visto, nadie la ha puesto”. El ex funcionario calcula que la mitad de las plazas “no se renovaron por la vía del concurso”.

Flavio Campos, secretario de Educación de Zacatecas, confirmó que las plazas vacantes estatales para maestros no se sometieron a concurso. Eso significa, lisa y llanamente, que cerca de la mitad de los puestos de trabajo renovados fueron asignadas a discreción por los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Quienes han manejado patrimonial y corruptamente las plazas lo siguen haciendo, al menos en parte.

La oposición al ACE no se limita a los maestros. Por distintas razones los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas y Durango no han firmado el acuerdo, porque, como señaló Omar Castro Cota, la Alianza “lejos de garantizar mayor impulso al sistema educativo, desde plazas docentes, equipamiento e infraestructura, en la realidad –por lo confuso de los criterios que aplica la autoridad federal– representa un retroceso para entidades como éstas”.

Para la ACE educar es sinónimo de “invertir en el recurso humano”. El lucro se disfraza de pedagogía. El nuevo sistema de reclutamiento docente hace de los profesores una mercancía que requiere someterse a una certificación estandarizada, diseñada con criterios empresariales y tecnocráticos.

La evaluación de los maestros conforme a un principio abstracto de “calidad”, que deja de lado en su elaboración la desigualdad social y las diferencias regionales y culturales, termina siendo no una herramienta para mejorar el trabajo pedagógico, sino un instrumento para impulsar la flexibilidad del mercado laboral y terminar con el normalismo.

En muchos estados los padres de familia pagan de su bolsillo al personal de intendencia, a los profesores de inglés, computación y danza. Sus cuotas financian la reparación de escuelas y el equipamiento escolar. En multitud de comunidades rurales las aulas tienen piso de tierra, techo de lámina de cartón y carecen de baños. No se construyen nuevos centros escolares, ni aulas didácticas, ni laboratorios o talleres. Los libros de texto gratuito llegan tarde o no llegan. Formalmente la Alianza contempla el mejoramiento de la infraestructura escolar. Ni lo ha hecho ni lo hará en los poblados más pobres. Como señala la OCDE, el gasto público en el sector no impacta en el mejoramiento de este rubro ni en el acceso a material didáctico de vanguardia.

La ACE atenta contra los principios educativos establecidos en la Constitución. La educación pública no es una empresa y el mercado no es una escuela de virtud. La actividad docente no debe regirse conforme a criterios mercantiles. La enseñanza debe seguir siendo un bien público, no una mercancía que beneficie a unos cuantos privilegiados. Es por eso, y no por el mantenimiento de privilegios, que luchan los miles de maestros que se oponen a la Alianza en el país.

## Poniendo la carreta delante de los bueyes

Jessie Yurisa Dzib Dzib es maestra de primaria. Ganó una plaza mediante un concurso, para trabajar en el municipio de Cozumel. La Secretaría de Educación de Quintana Roo le otorgó el 16 de agosto de 2008 un contrato de lista de raya por 15 días. No es susceptible de basificación, está sujeto a la evaluación de su desempeño y es pagado con recursos del municipio.

Jessie no es la única profesora que padece una situación así. En todo el país existen graves anomalías en la entrega de plazas de nueva creación a quienes concursaron y ganaron. Las vacantes definitivas son distribuidas por compadrazgos o acuerdos previos entre líderes sindicales y autoridades educativas. Las irregularidades están en todo el país. Y para muchos maestros más de todo el país eso es la ACE. De allí su rechazo al programa.

En nombre de la modernización, la Alianza reforma los lineamientos de la carrera magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: aprovechamiento escolar (medido a través del Ceneval), cursos de actualización certificados de manera independiente, y desempeño profesional. De esta manera pasa por encima del escalafón, y deja fuera criterios de evaluación tan importantes como la antigüedad y los estudios universitarios.

La ACE establece como criterio para calificar a los maestros el desempeño escolar de sus alumnos medido con la prueba Enlace. Este examen no distingue regiones o niveles socioeconómicos de los alumnos. Es así como, por ejemplo, en su área cívico-ética pregunta a los estudiantes por el significado de los tres colores del semáforo. Por supuesto, un niño urbano no tiene problema alguno para responder a esa pregunta. No así un muchacho de una comunidad rural.

La Alianza es para el gobierno de Felipe Calderón lo que Enciclomedia fue para la administración de Vicente Fox: la vía para hacer grandes negocios, abrogar conquistas laborales y privatizar la educación pública.

Formalmente destinada a proporcionar tecnología informática a las escuelas primarias del país, Enciclomedia se convirtió para Vicente Fox en el gran proyecto educativo de su sexenio. Le destinó más de 24 mil millones de pesos. Quienes desde las filas del magisterio se opusieron al proyecto y denunciaron que no respondía a las necesidades educativas nacionales, fueron acusados de ser enemigos de la modernización.

Conforme el tiempo pasa, se documenta que Enciclomedia no sólo tiene dudosos resultados pedagógicos, sino que fue un gran negocio para unos cuantos empresarios. Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública presuntamente negociaron y acordaron con las empresas proveedoras repartirse las compras para el programa.

La alianza abre a las organizaciones patronales la puerta para intervenir en la educación pública y para hacer negocios a partir de ella, tal como lo hizo con Enciclomedia. Convoca a los empresarios a impulsar la transformación por la calidad educativa. Mediante su participación en los consejos de participación social, los involucra en la evaluación de los maestros.

Los hombres de negocios disputarán una parte de los 14 mil millones de pesos que se destinarán a este programa en el presupuesto de 2009. El jugoso pastel de infraestructura educativa para educación básica, tan deseado por contratistas privados, consistirá en 2 mil 380 millones de pesos, y a Enciclomedia le tocarán más de 5 mil millones de pesos. La iniciativa privada participará tanto en el lucrativo negocio de las evaluaciones anuales que se practicarán a los maestros y a los centros escolares, como en el de las auditorías externas.

Los inversionistas no han esperado a que se les invite a los consejos para intervenir en el tema con su agenda. Sin tapujo alguno, Claudio X. González señaló: “debemos pensar cómo hacer para cambiar la educación”. La Confederación Patronal de la República Mexicana supervisó la aplicación del concurso de admisión para maestros de nuevo ingreso en el estado de Coahuila. No puede extrañar entonces que las cámaras patronales estén jugando un papel de primer orden en el apoyo a la alianza y en el fallido intento de movilizar a padres de familia contra maestros huelguistas en Morelos.

Los consejos de participación social tendrán entre sus funciones buscar recursos para el mantenimiento y funcionamiento de las escuelas, por conducto de donaciones o de cuotas cobradas a los padres de familia. De esta manera, así sea parcialmente, se traspasa a las familias de los alumnos el costo de la educación pública que, según la Constitución, debe ser gratuita.

Esta obsesión privatizadora puede verse con toda claridad en la jerga y los contenidos que integran el anteproyecto de norma oficial mexicana del Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria, en el que se resume el nuevo modelo educativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El documento define a los alumnos como

usuarios, a la SEP como proveedor, y a los padres de familia como “los supervisores y representantes ante la sociedad de los derechos y obligaciones del educando”.

El anteproyecto está plagado de referencias explícitas a la flexibilidad y competencia. Dice que el “desempeño del maestro y sus competencias serán certificadas por instituciones que cumplan con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”. Señala que es necesario incorporar a las organizaciones del sector privado al organismo rector de la gestión de calidad de educación. Estipula la necesidad de efectuar auditorías externas por un tercero, una vez al año. Traspasa. En suma, como hace la Alianza, entrega competencias públicas a entidades privadas.

Los maestros que se oponen a la ACE no buscan privilegios indebidos. La rechazan porque están seguros de que la calidad que reivindica no es más que un pretexto para que algunos hagan negocio y para que la derecha realice su viejo sueño de apropiarse de la docencia pública. El verdadero nombre del acuerdo debería ser Alianza para la Privatización de la Educación.

## Los que miran hacia el otro lado de la frontera

Quienes promueven la ACE ven hacia Estados Unidos. Su mirada no busca recuperar las mejores tradiciones pedagógicas nacionales. Tampoco reflexionar sobre las prácticas educativas exitosas de los países de excelencia académica. No. Su pretensión es otra: quieren copiar la reforma pedagógica impulsada por la administración de George W. Bush y reproducir la experiencia de los cristianos fundamentalistas en la construcción de una base social desde los consejos escolares.

Lo hacen a pesar de que la calidad de la educación en el país del Tío Sam dista de ser ejemplar, no obstante sus escuelas de excelencia. Estados Unidos ocupa el lugar número 28 entre 40 naciones en la enseñanza de matemáticas, y se gradúan sólo 75% de los alumnos que cursan la preparatoria.

En 2001 se aprobó en Washington la legislación Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB, por sus siglas en inglés), ley federal cuyo objetivo es mejorar la educación de todos los niños y medir la calidad de la educación a través de exámenes estandarizados de opción múltiple, responsabilizando a las escuelas por los resultados escolares; formalmente ofrece más opciones a los padres.

Muchos de los elementos que integran la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás están presentes en la ACE de México. Sea en el espíritu o en la letra, ambos proyectos son almas gemelas. Más aún, el programa educativo mexicano parece, en momentos, copia directa de la de nuestro vecino.

Que Ningún Niño se Quede Atrás ha recibido fuertes críticas de pedagogos, maestros, padres de familia y directivos. Importantes estudios muestran que, más allá de sus declaraciones a favor de la calidad educativa, sus resultados son pobres y limitados, cuando no francamente contraproducentes. (Véase Linda Darling-Hammond, “Evaluating No Child Left Behind”, *The Nation*, 2/5/07.)

Detrás de la ley estadounidense se encuentra la pretensión de subvalorar la educación pública. Los mecanismos de evaluación sesgados que se han utilizado han servido para mostrar que ésta es de pobre calidad. Han dado argumentos a quienes promueven los vales escolares, iniciativa que otorga subsidios para que las familias puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas, en detrimento de las públicas. En México, se trata de un anhelado sueño panista; es su versión de la gratuidad de la enseñanza.

Las denuncias sobre las tendencias privatizadoras ocultas en esta legislación provienen no nada más de la izquierda estadounidense, sino del mundo conservador. Por ejemplo, Susan Newman, subsecretaria de Educación Primaria y Secundaria durante el primer gobierno de Bush (2000-2004), señaló que importantes funcionarios dentro de esa administración vieron en NCLB un caballo de Troya para impulsar su propia agenda, “una forma de mostrar las fallas de la educación pública y reventarla” desde adentro. La ex subsecretaria asegura que entre los promotores de la ley hay “personas empujando duro a favor de las fuerzas del mercado y la privatización” de la educación (*Time*, 8/6/08).

Los críticos de Que Ningún Niño se Quede Atrás, al igual que los maestros que en México se oponen a la Alianza, advierten que los instrumentos de evaluación de ambos modelos educativos se concentran en realizar pruebas cuantitativas, más que en proporcionar las herramientas adecuadas para medir la formación y el desempeño académico. Bajo este sistema, los maestros se concentran en que los estudiantes memoricen las respuestas correctas en los exámenes, en lugar de comprender a profundidad los contenidos educativos para ser capaces de aplicarlos creativamente a la hora de enfrentar retos similares que acontecen en la vida cotidiana.

Las naciones de altos niveles educativos privilegian en su currícula el desarrollo del pensamiento crítico y la solución de problemas, usando exámenes que obligan al estudiante a investigar, a resolver desafíos del mundo real y a defender ideas propias de manera oral y escrita. Estos criterios nada tienen que ver con los exámenes de opción múltiple estandarizados.

Por supuesto, alrededor de la capacitación para aprobar las pruebas estandarizadas florecen magníficos negocios privados. Neil Bush, el hermano del presidente de Estados Unidos, montó Bush's Ignite! Inc, empresa dedicada a esta actividad, que le ha prodigado ganancias millonarias. (*Business Week*, octubre 16, 2006.).

Pero las semejanzas de la Alianza para la Calidad de la Educación con el modelo conservador estadounidense rebasan el marco estrictamente normativo. La ACE abre a la iniciativa privada y a sus asociaciones civiles un enorme espacio para participar en la gestión de la escuela mediante los consejos escolares, y desde allí crear clientelas políticas. Por eso el entusiasmo de las cámaras patronales con ella.

En Estados Unidos los cristianos fundamentalistas han buscado conquistar los consejos escolares para impulsar sus valores y su moral. Desde allí se han dotado de una base social significativa. La derecha religiosa controla ya 15% de los consejos escolares de esa nación. Utilizando las posiciones de poder que ocupan en esos consejos, promueven la educación religiosa en las escuelas públicas. Ponen en duda la teoría de la evolución de Charles Darwin. Reivindican el creacionismo (creencia inspirada en dogmas religiosos que sostiene que la Tierra y cada ser vivo son obra de Dios) como una enseñanza igualmente válida a la de cualquier conocimiento científico. Buscan imponer a otros su moral religiosa y su doctrina teológica.

Quienes defienden la Alianza en México viendo hacia el norte copian una política pública que no mejora la calidad de la educación. Se trata de un modelo para que algunos hagan grandes negocios y la derecha construya desde las escuelas una base social de la que, hasta ahora, carece.

## La resistencia

En el prefacio a *Zapata y la Revolución Mexicana*, John Womack escribe: "Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución".

Los historiadores que hagan la narrativa del actual conflicto magisterial en contra de la ACE podrán tomar prestado

el párrafo de Womack para explicar el surgimiento de la revuelta docente, y decir: "Este es un libro acerca de unos profesores que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una rebelión".

La propaganda oficial ha presentado las actuales protestas de los trabajadores de la educación como un movimiento conservador en contra de una reforma modernizadora que busca terminar con la venta de plazas y los privilegios indebidos. ¿Es esto cierto? No, no lo es. La ACE es una reforma privatizadora, vertical y autoritaria, carente de transparencia, que atenta contra la educación pública y desprofesionaliza a los maestros convirtiéndolos en meros facilitadores educativos. No termina con el influyentismo ni con la venta de plazas.

La Alianza fue decidida desde arriba sin la consulta ni la participación de los maestros de base. Fue acordada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo, a quienes miles de profesores en todo el país no reconocen como su dirigente. ¿Se puede modernizar la educación pública al margen —y en contra— de los maestros? Obviamente no.

¿Fue la ACE una iniciativa de los estados? No, no lo fue. La Alianza fue una imposición del gobierno federal a las entidades federativas en nombre de la "federalización". Eduardo Bours, gobernador de Sonora y aliado de Elba Esther Gordillo, así lo reconoció. Según él, las inconformidades tienen su origen en un acuerdo central en el que la responsabilidad no es de los mandatarios estatales. "Es —asegura— una Alianza que se firma a nivel nacional y que la bronca pega en los estados." (*Reforma*, 27 de septiembre de 2008).

El concurso nacional de oposición para las nuevas plazas establecido por la ACE viola el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el *Diario Oficial* el 20 de mayo de 1992, pues invade competencias locales y cancela la contratación de profesores de nuevo ingreso por parte de los estados.

Como recordó Gustavo Santín en *La Jornada de Oriente*, el Acuerdo establece textualmente: "Al entrar en vigor el presente convenio, el gobierno estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema educativo estatal".

Es un hecho que la venta de plazas docentes existe. Son los dirigentes sindicales afines a *la maestra* y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública quienes

han lucrado con ella. En este negocio no participan los maestros de base. Aunque quisieran no tienen forma de hacerlo ¿Acaba el concurso de oposición con esta lacra? No. José Luis Figueroa Rangel, dirigente del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano denunció que en Zacatecas existe un enorme tráfico de influencias en la Secretaría de Educación y Cultura y que muchos de los hijos y parientes de funcionarios fueron beneficiados. Este tipo de señalamientos se han hecho por todo el país. En la realización del examen no hubo un padrón confiable de concursantes y la emisión de la convocatoria para participar fue extemporánea.

El concurso de oposición que se aplicó a los solicitantes de una plaza estuvo hecho, literalmente, con las patas. Lo único que mostró fue la ignorancia de quienes lo diseñaron y aprobaron en la SEP. Se desconoce aún quienes fueron los “expertos” en docencia que lo elaboraron. Consistió en exámenes de opción múltiple que no contemplaron diferencias regionales ni socioeconómicas.

Los exámenes no respetaron la recomendación de la UNESCO de 1996, que establece que en “los criterios de contratación de futuros docentes no deberían depender solamente del nivel de conocimiento de los candidatos. Las cualidades personales, tales como el rigor moral, el sentido de responsabilidad y de solidaridad, la motivación, la predisposición para el trabajo en equipo y la aptitud para comunicar son condiciones necesarias”. Ninguna de ellas se tomó en consideración durante el concurso.

Los funcionarios de la SEP y los directivos de las cúpulas empresariales utilizaron los resultados de los concursos de oposición para descalificar a la planta docente del país. El sentido profundo de la ofensiva contra los maestros contenida en la Alianza quedó de manifiesto en los señalamientos de Jorge Santibáñez, subsecretario de Planeación, a propósito de la reprobación de la mayoría de postulantes. “¿Quiéren ser profesores en las escuelas de México?, pues los que reprobaron no cumplen con las condiciones, y no lo serán”, dijo, y sentenció que quienes deseen ingresar deberán “seguir formándose si quieren incorporarse al sistema educativo con las nuevas reglas de calidad”.

La Alianza no toca, ni con el pétalo de una rosa, a los miles de comisionados sindicales que disfrutaban de plazas sin tener que trabajar frente a grupo y que están al servicio de Elba Esther Gordillo y del Partido Nueva Alianza. ¿Se evaluará a estos *aviadores* algún día? Por supuesto que no.

La revuelta magisterial contra la ACE no es una rebelión conservadora ni busca preservar privilegios. Lo verdaderamente retrógrado es la supuesta modernidad de los tecnócratas y funcionarios panistas que, con el pretexto de la mejora del servicio educativo, busca desamortizar la educación pública para abrir paso al capital privado y hacer que los docentes pierdan el control sobre el proceso pedagógico. La resistencia magisterial, basada en la defensa de sus mejores tradiciones docentes, no es un lastre del pasado sino una apuesta por el futuro.

## **Normales rurales: la revuelta I**

En el normalismo rural de todo el país hay una intensa agitación y enfrentamientos entre policías y estudiantes. A finales de noviembre de 2008 fue Tlaxiaco. El 29 de agosto de 2008 fue Tlaxiaco. En noviembre de 2007 fue Ayotzinapa. Quedan en el país solamente 16 normales rurales, todas bajo acoso gubernamental. Sus alumnos se aglutinan en la organización estudiantil más antigua de México: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Lucio fue su líder nacional en 1961, cuando todavía existían 28 escuelas de este tipo.

Guerrero es uno de los tres estados del país con mayor rezago educativo. Al menos 107 mil 672 niños de cinco a 14 años de edad no asisten a la escuela en la entidad, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: “que estamos rezagados en alfabetización, en educación preescolar, en primaria y en secundaria”.

Ironías de la nueva izquierda. Los planteles escolares de la entidad cierran por falta de maestros, pero el gobierno se niega a contratar más educadores. Tres mil personas cobran salarios en la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) sin laborar, pero 75 jóvenes que terminaron sus estudios de normalistas y que desean trabajar no tienen empleo.

Guerrero está gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública, pero su mandatario Zeferino Torreblanca quiere reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la “alumnocracia” y el “desorden”, que, según él, privan en la institución escolar. Se niega a dar empleo a 75 alumnos egresados porque —dice— son “vándalos”.

El 14 de noviembre de 2007 la policía desalojó brutalmente del Congreso estatal a los muchachos, cuando realizaban una protesta. El gobernador sostuvo que su gobierno “hizo cumplir el estado de derecho”. Carlos Reyes, presidente del Congreso y militante del PRD, solicitó la intervención policial. El secretario de Gobierno, Armando Chavarría, ordenó actuar a la fuerza pública. El presidente del partido del sol azteca, Sebastián de la Rosa, respaldó la represión. En cambio, el diputado perredista Ramiro Solorio apoyó a los muchachos y criticó al mandatario. De inmediato se le amenazó con hacerle juicio político.

En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 80 años. Allí estudió Lucio Cabañas, el mítico dirigente guerrillero. Egresó como profesor a los 27 años.

La matrícula escolar de Ayotzinapa es de 535 alumnos. Calzan huaraches. Todos son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero. Serlo y tener certificado de bachillerato son condiciones para ingresar. Esta institución es una de las pocas opciones de movilidad social que tienen. A diferencia de otros maestros que buscan trabajar en las grandes ciudades, los que terminan sus estudios en ella desean enseñar en comunidades pobres y marginadas.

Al ingresar, los jóvenes viven internados en la escuela, reciben una beca de 35 pesos diarios y tres comidas al día en el comedor. El presupuesto para alimentación por alumno apenas alcanza 45 pesos diarios. El internado cuenta con dormitorios, baños y lavaderos muy modestos. En las áreas de cultivo los alumnos siembran, crían animales y preparan alimentos.

El director es nombrado por la SEG. Sin embargo, no puede tomar decisiones sin consultar al comité de estudiantes. Como sucede en todas las normales rurales, los jóvenes participan en la administración de la escuela y en las decisiones que los afectan.

Para el secretario de Educación del estado, el autogobierno y la educación rural son “costumbres” con las que hay que acabar. Asegura que ha llegado el momento de que los estudiantes entiendan que “lo que tradicionalmente venía ocurriendo ya no va a ocurrir”.

El conflicto no es nuevo. Cada año hay problemas similares con los normalistas que terminan sus estudios y requieren empleo. Y se resuelven negociando. Ciertamente hay obstáculos para ello. Durante las pasadas administraciones priístas la educación fue la caja chica de

los mandatarios en turno. El ex gobernador René Juárez creó alrededor de diez mil plazas sin tener los recursos presupuestales para mantenerlas. La SEG arrastra un déficit presupuestal de mil 500 millones de pesos. Además hay tres mil aviadores.

Pero el problema de Ayotzinapa puede resolverse. Por ejemplo, quitando las plazas a quienes no trabajan. U ocupando las de los maestros que se van a jubilar. Hay más de 7 mil profesores con más de 30 años de servicio que están listos para retirarse.

¿Por qué entonces la bronca no se soluciona? Básicamente porque el gobernador no quiere hacerlo y porque ha mostrado una enorme falta de pericia política. Desprecia a los jóvenes estudiantes campesinos y no entiende la importancia de la educación rural. Privilegia los desplantes autoritarios a la negociación y el diálogo. Se comporta con los muchachos con una intransigencia y una rigidez que no tiene hacia los hoteleros que violan las disposiciones ambientales.

Poco antes de morir, Othón Salazar, el legendario dirigente magisterial guerrerense, levantó la voz para condenar la agresión contra los normalistas. “No se vale echar mano de la acción represiva –dijo–. Toda aquella persona que le interese resolver los problemas de Guerrero debe conocer qué razones tienen los jóvenes para plantear sus inquietudes”.

En sentido contrario de lo que afirma el gobernador y buena parte del PRD estatal, el profesor Salazar ve en Ayotzinapa “la única señal de vitalidad que todavía le queda a la nueva generación del estado de Guerrero. Hay que mantener a salvo la dignidad razonable para exigir derechos legítimos, en este caso de la muchachada de la normal rural. Es terrible que tenga uno que conseguir las cosas arrodillándose ante el poder”.

## **Normales rurales: la revuelta 2**

El 27 de noviembre de 2008 cientos de estudiantes normalistas rurales, de Michoacán y otros estados, tomaron camiones para trasladarse a la ciudad de Morelia, tal y como lo han hecho en muchas otras ocasiones anteriores. Querían celebrar un mitin para recordar la represión que sufrieron en 2002. Pero la policía les impidió el paso lanzando gases lacrimógenos. Los jóvenes se defendieron con palos, piedras y bombas molotov. Los uniformados detuvieron a 130 mujeres y tres hombres. Los muchachos quemaron dos patrullas.

La mayoría de los jóvenes que participaron en el enfrentamiento son estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío, Michoacán, a 25 kilómetros de Morelia, sobre una extensión de 12 hectáreas de lo que fue la ex hacienda de Coapa. Fue fundada en 1922. Forma parte de las ocho normales públicas que existen en el estado.

De ella han egresado destacados luchadores sociales, como el líder indígena Elpidio Domínguez, comunero de Santa Fe de la Laguna, asesinado en 1988 por un ganadero, y Sergio Espinal, dirigente nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El enfrentamiento es un claro indicador del descontento y la rabia que existen entre los jóvenes normalistas rurales y de la torpeza gubernamental para atender sus demandas. Los muchachos viven en carne propia la amenaza del cierre de sus escuelas, la negativa a otorgarles plazas docentes a los egresados y condiciones de vida como estudiantes muy precarias. La movilización y la protesta son para ellos las herramientas para sobrevivir y mantener vivo un legado.

El mismo día que comenzaron los cursos escolares, Elba Esther Gordillo provocó un enorme alboroto nacional al anunciar la necesidad de convertir a los centros de formación de docentes en escuelas para técnicos en turismo y actividades productivas. El fantasma de la desaparición de las normales rurales rondaba ya por las escuelas y su declaración no hizo sino verificar un temor fundado. Apenas el pasado mes de julio, después de 86 años de funcionamiento, fue cerrada el Mexe. Sobreviven en el país 16 instituciones de este tipo, la mitad de las que operaban a mediados de los sesenta, y la tentación de deshacerse de ellas es grande.

En 1998, la matrícula de alumnos de Tiripetío se redujo en 120 espacios, se limitó la asignación automática de docentes a los egresados y se estableció que el gobierno michoacano no se hacía responsable de garantizarles el trabajo. En 2002 Lázaro Cárdenas amenazó con cerrar la escuela. Durante 12 días el ejército cercó la institución. Ahora, los normalistas acusan a Aída Sagrero, secretaria de Educación del estado, de tratar de acotar la matrícula de nuevo ingreso.

En la Vasco de Quiroga estudian como internados 540 varones, todos ellos provenientes de familias pobres del medio rural. Las condiciones en las que viven y estudian son muy precarias. Cuentan con una beca alimenticia de apenas 49.25 pesos por día. Comen frijoles, tortilla, verduras, té,

pan dulce, y en ocasiones conejo y pollo. Beben leche dos veces por semana. Para alimentarse y conseguir recursos crían cerdos, borregos y conejos, y siembran cuatro y media hectáreas de maíz.

Hacinados, pernoctan en dormitorios con techos de lámina distribuidos en cinco edificios. Las literas están equipadas con viejos colchones de hule espuma y cobijas raídas por los muchos años de servicio. Los cuartos están deteriorados y su equipamiento es precario. Tanto así que a comienzos de este año un corto circuito provocó un incendio en el que murieron calcinados, mientras dormían, dos estudiantes. No contaban con extintores ni con alarma ni con salidas de emergencia y los bomberos tardaron dos horas en llegar a la escuela.

La licenciatura dura cuatro años. Estudian en 16 aulas para 15 grupos escolares. La escuela está habilitada con Enciclomedia, pero el equipo de cómputo apenas sirve para proyectar diapositivas. Tiene un laboratorio de ciencias naturales, salón de danza, de artes plásticas, carpintería, biblioteca, comedor, y algunas canchas deportivas. Sin embargo, en época de lluvias las instalaciones se inundan. Los jóvenes no cuentan con recursos para adquirir uniformes deportivos.

Una de las paredes del edificio tiene pintada una máxima del pedagogo brasileño Paulo Freire que inspira la acción de los muchachos: "No se hace el alumno en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión, en la praxis." Así es que, lejos de conformarse con la situación que viven, dedican mucho tiempo y energía a tratar de transformarla y a buscar que se incremente el presupuesto para su normal.

Los estudiantes de Tiripetío, al igual que una parte muy importante del magisterio estatal, tienen graves problemas con Aída Sagrero, secretaria de Educación del estado. La funcionaria, integrante de una de las corrientes sindicales del magisterio estatal perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), está fuertemente enfrentada a la expresión mayoritaria de los trabajadores de la educación democráticos.

El magisterio michoacano desempeña un papel central en las movilizaciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Aunque el gobernador Leonel Godoy no ha firmado el pacto, los docentes disidentes creen que no ha expresado una posición pública de rechazo. Los alumnos de la Vasco de Quiroga, como el conjunto de los normalistas rurales del país, repudian la Alianza y participan activamente en las movilizaciones en su contra.



Tiripetío nos muestra que el normalismo rural tiene muchos enemigos dentro de la administración pública y los gobiernos de los estados. Simultáneamente, nos recuerda que, en una sociedad rural acosada por una “modernidad” a golpes de mercado, es una de las pocas vías de movilidad social realmente existentes para los hijos de los familias campesinas. Cerrar esa válvula tendrá costos nada despreciables.

### Maestros: cero en conducta

Los maestros mexicanos han sufrido una metamorfosis profunda durante los últimos treinta años. Han cambiado como gremio y como profesionales. Simultáneamente han transformado el país.

Aunque las guerrillas rurales de los años sesenta se habían formado con educadores rurales, durante la década de los setenta muchos mentores de izquierda sentían una especie de desprecio por sus compañeros. “Es que no son obreros”, afirmaban. De esa manera decían que no eran sujetos revolucionarios, sino, a lo sumo, compañeros de viaje de la causa proletaria.

Hoy, en cambio, son muchos los trabajadores de la educación que, además de hacer sindicalismo, están involucrados en luchas de resistencia social en organizaciones revolucionarias y en partidos políticos progresistas y en defensa de la educación pública. Es común encontrar profesores como asesores de organizaciones campesinas, representantes en puestos de elección popular y dirigentes partidarios.

Una de las claves que explican esta sorprendente construcción del magisterio como actor político es la lucha de una organización única y sorprendente: la CNTE.

Prácticamente no existen en el movimiento sindical mexicano experiencias similares a la CNTE. Su permanencia, la continuidad de las protestas, la magnitud de su membresía, su radicalidad, el sindicalismo que practica, son inusitados.

La Coordinadora expresa la contradicción existente entre un aparato sindical esclerosado y vertical y una base social más informada y politizada. Refleja la existencia de un nuevo magisterio más escolarizado, defensor de la educación pública. Evidencia la paradoja de una actividad que en el pasado se consideró

un apostolado, pero que en el presente es considerada mero trabajo actividad para ganarse la vida, instrumento de ascenso social cada vez más insuficiente.

Poco a poco los maestros democráticos han comenzado a cuestionarse la función social de su trabajo. De la lucha por sus demandas más sentidas, de la solidaridad hacia otros contingentes en conflicto, han pasado a preocuparse de su materia de trabajo. La transición no es sencilla: de alguna manera implica el cuestionamiento profundo de sus pequeños privilegios. La subversión de la actividad docente implica que los maestros se conviertan en alumnos. Su actual lucha contra la ACE y en defensa de la educación pública está inscrita en esta dinámica.